



## *H. Cámara de Diputados de la Nación*

### PROYECTO DE DECLARACION

## *La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

### DECLARA

Repudiar y rechazar enérgicamente el accionar por parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la utilización del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta Jefe de Gobierno, para acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas por la justicia.

Entre las personas se encuentran dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Repudiar, asimismo, todo tipo de espionaje por parte del Estado que tiene por objetivo la intromisión para desarticular la organización de aquellos y aquellas que reclaman por causas populares, y que de esta manera se suma a otros casos como el llamado Proyecto X, o el Proyecto AMBA, o el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan y del REPUNTE. Este abanico de investigaciones ilegales fue producido sin distinción de signo político de los gobiernos de turno.

Rechazar, también el reforzamiento de un Estado policial que viola los derechos individuales.

*Romina Del Plá*

*Nicolás del Caño*

*Myriam Bregman*

*Alejandro Vilca*



## Fundamentos

Sr. Presidente:

Como es de público conocimiento el juez Roberto Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.

A partir de ello, salió a la luz que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: desde diputados y dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad como ser la diputada nacional Myriam Bregman, el diputado nacional Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, también diputado (MC), o a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, pasando por propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández y la Vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, e incluso dirigentes de la coalición *Vamos Juntos* como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Facundo Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

Vale señalar que, a su vez, la periodista Irina Hauser ha denunciado múltiples irregularidades en torno a la contratación de la empresa prestataria del servicio, así como también de su composición y de su funcionamiento.

El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de la CABA se valió del sistema para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima. De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.

No es casual que el ministro de seguridad de la CABA Marcelo D'Alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero (actual Legislador de la CABA) le respondió a Horacio Rodríguez Larreta cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que *“estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regentado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes”*.

Este nuevo espionaje por parte del Ministerio de Seguridad de la CABA se suma a otros que también hemos denunciado en tiempo y forma.

Como el espionaje a los familiares de Ara San Juan en donde la resolución del juez Martín Bava, señala que agentes de la AFI elevaban sus informes a la cúpula del organismo, integrada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes a su vez mantenían al tanto al expresidente Mauricio Macri.

Uno de los partes anticipaba, con gran nivel de detalle, los reclamos que los familiares presentarían al exmandatario en la Casa Rosada. Otro informaba que aquellos se acercarían a la quinta de Chapadmalal, en la que se encontraba el empresario en febrero de 2018, para entregarle una carta con una solicitud de pedidos de informes.

El espionaje sufrido por los familiares, que querían conocer las razones del hundimiento y cuestionaban al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, formó parte de este despliegue mucho más vasto que montan los servicios de inteligencia. En el marco del Proyecto AMBA, se crearon seis bases de la AFI en el Conurbano, entre 2016 y 2017, que se sumaban a las ya existentes en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.

De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), esas bases estuvieron dirigidas por excomisarios que cumplieron funciones durante la última dictadura militar. Y llevaron a cabo tareas de inteligencia contra decenas de organizaciones obreras, sociales, políticas, e incluso comedores populares y merenderos. Los sindicatos docentes, grupos piqueteros, de Derechos Humanos, y las organizaciones que integran el Frente de Izquierda, fueron objetivos de los espías.

El espionaje contra las organizaciones de lucha fue un recurso al servicio de las políticas de ajuste, amedrentamiento y represión, que tuvieron uno de sus capítulos en la aprobación de la reforma previsional y el posterior enjuiciamiento y condena de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por participar de las manifestaciones contra el robo a los jubilados.

Se suma a este andamiaje de espionajes los dichos de Marcelo Villegas exministro de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en donde expresa su deseo de contar con una "Gestapo" para embestir contra los trabajadores y los sindicatos.

Pero no ha sido un recurso privativo del macrismo, como lo enseña el *Proyecto X* de la época kirchnerista. Es decir, todos los gobiernos "democráticos" se valieron de los instrumentos del Estado, para llevar a cabo sus propósitos contra los derechos más elementales, y no solo incluyendo a quienes fueron partícipes de la última dictadura militar, sino implementando sus métodos; secuestro, tortura seguida de muerte fue lo que la policía Bonaerense a cargo de Sergio Berni hizo con Facundo Astudillo Castro. Hasta el día de hoy el homicidio sigue impune, manteniendo el encubrimiento del ministro de seguridad amparado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Del famoso *Proyecto X*, se publicaron documentos de la información que recababa Gendarmería con datos de los dirigentes sociales de todas las villas de la Ciudad o un listado de más de mil organizaciones monitoreadas por la fuerza que incluyeron gremios, entidades del campo y organismos de derechos humanos.

Cabe señalar también las declaraciones de Rodrigo Jara, quien fuera bailarín de *Showmatch*, programa conducido por Marcelo Tinelli. En una entrevista en 2021,

reconoció sin mosquearse que hacía 15 años atrás, en 2006, integró los servicios de inteligencia de la policía bonaerense.

Jara relató: *“trabajaba de civil. Tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes. Cuanto menos parecieras policía, mejor”, y detalló que “en ese momento había ‘explotado’ el tema de los piquetes. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar, si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.* Además, agregó que participó incluso de las escuchas telefónicas de la fuerza luego de la desaparición de Julio López, un “full-time” del espionaje.

No es menor que Jara presente que le asignaron esta tarea “cuando estallaron los piquetes”. El 2006 fue un año destacado para el movimiento piquetero que venía de protagonizar la rebelión popular del 2001. Quienes gobernaban en los años en que Jara era un servicio de inteligencia infiltrado, son los mismos que gobiernan hoy con las mismas políticas. Basta con decir que la policía bonaerense respondía a las órdenes del gobierno provincial de Felipe Solá, que gobernó con Menem, con Ruckauf, con los Kirchner y hoy con los Fernández.

Las declaraciones de Jara blanquearon un método que ya es conocido y se repite constantemente.

Esta política de echar mano a los servicios de inteligencia no tiene otro fin que digitar la represión a las movilizaciones populares. Existe hoy, existía en 2006 y existe desde hace décadas, arrastrando incluso elementos y recursos de la dictadura militar.

Por eso, es necesario un repudio y rechazo a estas prácticas que van en contra de los intereses de las y los trabajadores.

Para finalizar, hacer mención a que este Proyecto de Declaración se complementa con los ya presentados en la Legislatura porteña por los legisladores del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.<sup>1</sup>

Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el presente Proyecto de Declaración.

- 1) <https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122720>  
<https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=122689>

***Romina Del Plá***

***Nicolás del Caño***

***Myriam Bregman***

***Alejandro Vilca***

